

Pronunciamiento Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Las fuerzas antidemocráticas amenazan la transición

En vísperas de la salida de ONUSAL del país y del cierre formal de la transición, las fuerzas antidemocráticas amenazan la transición. La amenaza está configurada por el avance de la Fuerza Armada en el plano político y de seguridad pública, por una conducción política inadecuada, tanto del gobierno como de los partidos políticos, por la ineficiencia institucional y por la acción de fuerzas opuestas a la democratización. En este momento, varias dinámicas desestabilizadoras no necesariamente dependientes unas de otras, al menos en su origen, inciden simultáneamente en la sociedad y la empujan en una dirección sumamente peligrosa.

Con este pronunciamiento, queremos compartir nuestra preocupación ante la gravedad de la situación, hacer conciencia sobre la posibilidad real que el proceso de transición sea revertido y proponer que se cambie de rumbo rápida y firmemente. Nadie resultará beneficiado, ni siquiera quienes piensan que la restauración del régimen autoritario y militar favorecerá sus intereses, si la transición es revertida. Sin querer ser alarmistas, pensamos que el análisis objetivo de los últimos acontecimientos obliga a concluir que el proceso de transición se encuentra en grave peligro.

1. La movilización de los desmovilizados

Los desmovilizados de la Fuerza Armada han sorprendido al país al tomarse edificios públicos, capturar rehenes —incluidos diputados— e impedir el libre tránsito en varios puntos del país y han descubierto que el gobierno cede ante sus presiones violentas. A éstos se han sumado ex

miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, ex patrulleros cantonales y ex defensas civiles. De esta manera, los desórdenes callejeros, las tomas, las amenazas y la violencia física han retornado.

El gobierno no ha manejado adecuadamente el descontento ni la protesta de estos grupos. Si hubiese entregado los beneficios incluidos en los acuerdos, en lugar de dar largas, los desmovilizados no tendrían bandera en la actualidad. Por otro lado, la libertad con la que han actuado cuestiona la eficiencia del órgano de inteligencia del Estado. Sin embargo, el Ministro de Defensa reconoció públicamente que conocía de antemano los planes de los desmovilizados, pero no tomó las medidas apropiadas para evitarlo.

No hace falta esforzarse mucho para concluir que, dada la eficacia y el alcance de sus operaciones, detrás de los desmovilizados se encuentran las poderosas fuerzas que siempre se han opuesto a la negociación, a los acuerdos y a la transición. Estas fuerzas han capitalizado a su favor las necesidades objetivas y subjetivas de los desmovilizados, manipulándolas. Mientras estas fuerzas no sean debidamente identificadas y controladas, las acciones de los desmovilizados continuarán, pues, en el fondo, no se busca la satisfacción de sus demandas, sino demostrar la falta de dirección política, la incompetencia de la nueva policía y, por lo tanto, la necesidad de que la Fuerza Armada recupere las posiciones perdidas dentro del aparato estatal.

No sería extraño, entonces, que los desmovilizados estuvieran siendo organizados desde algunos cuarteles y brigadas, en los cuales, además de crearles falsas expectativas sobre la satisfacción de sus necesidades más sentidas, les estarían entregando armas de guerra. Esto significaría que la red paramilitar no ha sido desarticulada completamente. De esta forma, el recurso a los medios violentos se sigue presentando como el más apropiado para conseguir la satisfacción de las demandas justas. La falta de voluntad política del gobierno para identificar y sancionar penalmente a los autores intelectuales de estas movilizaciones es un indicio más de que los responsables están vinculados a la Fuerza Armada y a algunos círculos políticos y empresariales.

2. El bloqueo de la transferencia de tierras

A finales del año pasado, el gobierno se comprometió a agilizar la transferencia de tierras y, de hecho, el proceso se aceleró. Sin embargo, a comienzos de 1995, se detuvo de nuevo. De nada han servido las promesas y las órdenes presidenciales para avanzar y cumplir con lo acordado en la última calendarización. Junto a la transferencia de tierras se encuentran las limitaciones en el crédito, la capacitación y la asistencia técnica. Esta contradicción entre el discurso y los hechos

apunta a un problema de poder en el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Pareciera que existen sectores muy interesados en que el gobierno no cumpla para que los beneficiarios potenciales provoquen desórdenes. De esta forma, el gobierno enfrentaría dificultades nuevas e innecesarias, tanto nacional como internacionalmente. Quienes están detrás calculan que los campesinos se lanzarán a las calles, provocando desórdenes que, desde otra perspectiva, pongan en evidencia la incompetencia gubernamental, la incapacidad de la policía para controlar la protesta popular y la necesidad de recurrir a la Fuerza Armada.

3. La campaña contra la Policía Nacional Civil

La Policía Nacional Civil experimenta las dificultades propias de una institución nueva con deficiencias serias en cuanto a la cantidad, formación y experiencia del personal disponible para garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio nacional, con apego estricto a los derechos humanos. No es extraño, entonces, que no esté respondiendo a las expectativas que sobre ella se tenían. Ahora bien, la Policía Nacional Civil no ha crecido ni madurado porque no se le ha permitido hacerlo. Desde su fundación, quienes se oponían a ella y pedían la permanencia de los cuerpos de seguridad han intentado tergiversar su desarrollo institucional.

Aprovechándose de sus limitaciones reales, la Policía Nacional Civil es objeto de una campaña de desprestigio que enfatiza su impotencia e inutilidad. Pareciera que se espera, injustamente, que la policía garantice la seguridad y mantenga el orden sin preparación ni equipo y luchando al mismo tiempo contra quienes pretenden socavar su eficacia desde dentro.

El auge del crimen organizado y no organizado, de los escuadrones de la muerte y de limpieza social, la "industria" del secuestro, el tráfico de drogas, vehículos e influencias, los incendios, los asesinatos de familias enteras, incluyendo menores de edad, la falta de investigación policial y de acción judicial explican que la población, desesperada, tienda a pedir el regreso de la Fuerza Armada y no pueden dejar de interpretarse como parte de un plan desestabilizador.

Como si esto fuese poco, en el seno de la Policía Nacional Civil han surgido el descontento y la protesta al exigirse el retiro de unos 70 agentes de la unidad antinarcóticos que no llenan los requisitos para pertenecer a la institución. En realidad, estos agentes fueron trasladados de la extinta Policía Nacional sin cumplir con los requisitos establecidos en abierta violación de los acuerdos de paz. Con su retiro se quiere corregir uno de los errores cometidos por el gobierno anterior. Sin em-

bargo, los policías afectados se declararon en huelga, exigiendo indemnizaciones más allá de las estipuladas por la ley.

4. La aventura económica del gobierno

En este contexto, el gobierno quiere implementar una serie de medidas económicas ante las cuales un sector de la empresa privada ha manifestado reservas serias, mientras la mediana y pequeña empresa, los sindicatos, las organizaciones sociales, las iglesias, las universidades, los centros de investigación más prestigiosos e incluso las instituciones financieras internacionales más conservadoras se han opuesto.

Aunque las medidas han querido ser justificadas alegando que combatirán la pobreza y mejorarán la calidad de vida de las mayorías populares, en realidad, favorecerán a los exportadores, industriales y comerciantes que se apoderaron de la banca privatizada por el gobierno anterior. El siguiente paso es apoderarse del sistema de previsión social y, con sus recursos, adquirir las empresas estatales. Con todos estos recursos, este reducido grupo podrá competir en el mercado financiero internacional. Por lo tanto, la dimensión social con la cual se pretenden justificar estas medidas, es mera retórica para encubrir su pretensión verdadera.

Curiosamente, entre los perdedores se encuentran tanto la industria y la agricultura no diversificadas como los trabajadores y las mayorías populares. Aparte de los enormes riesgos económicos que esta política implica en sí misma, con toda razón ha provocado el descontento en casi todos los sectores. El sector laboral está decidido a resistir la privatización y el empobrecimiento generalizado que se avecinan. Así, en lugar de generar equidad, estabilidad y seguridad, la política económica que se pretende imponer está dando paso a lo contrario, es decir, profundizará la desigualdad, la inestabilidad y la inseguridad.

A todo esto hay que agregar las denuncias de corrupción las cuales, no obstante la objetividad que puedan tener, son otra pieza más en este ajedrez conspirativo. Corrupción siempre ha habido, la novedad está en identificar a las personas e instituciones corruptas. Sin embargo, quienes encabezan esta cruzada no buscan tanto la honestidad y la honradez públicas, como atacar al poderoso grupo aglutinado alrededor del presidente anterior. De ahí que sus denuncias sean seleccionadas cuidadosamente.

Resulta incomprensible cómo un gobierno que debiera estar interesado en la estabilidad y el orden, está precisamente provocando inestabilidad y desorden al no cumplir con los acuerdos de paz, al permitir que se atente impunemente contra el proceso de transición y al embarcarse en

una aventura económica en la cual pone en grave peligro la vida de la mayoría de la población.

5. ¿Hacia dónde pretenden llevar el país?

El análisis de estos acontecimientos muestra la existencia de dos proyectos contradictorios y nocivos para El Salvador. Uno de ellos pretende revertir el proceso de transición y restaurar un pasado del cual pensábamos que nos estábamos alejando. La sombra del régimen militar verticalista se cierne sobre el país. Se trata de militares, políticos y civiles poderosos que todavía siguen pensando que la guerra debió pelearse hasta el final. Para ellos, la democracia sigue siendo una concesión que nunca debió hacerse. Piensan que la Fuerza Armada garantiza mejor sus intereses económicos y sus pretensiones políticas.

Quienes impulsan este proyecto se consideran respaldados por el Congreso de Estados Unidos, controlado ahora por los republicanos. En un sentido, sobrevaloran el poder de los partidos políticos en ese país y su interés en El Salvador; pero en otro sentido, saben bien que el gobierno demócrata no tiene toda la influencia que quisiera o pudiera tener para determinar la política exterior.

La Fuerza Armada, por consiguiente, tiene delante de sí un desafío tanto más importante en cuanto que puede ser el factor de poder determinante en esta coyuntura y en cuanto la sociedad civil no se decide a ocupar los espacios abiertos por los acuerdos de paz para protestar y proponer. Todavía no hay indicios suficientes para prever a qué lado se inclinará la Fuerza Armada, pero no hay que descartar que todavía se sienta tentada por la posibilidad de participar más abierta y directamente en el ámbito político. Aunque es muy poco probable que este proyecto llegue al extremo del golpe de Estado —un disparate político, por supuesto, pero siempre una posibilidad—, un golpe técnico que respete las formalidades democráticas no es descartable —otra cosa es que política y éticamente sea una aberración. En realidad, la Fuerza Armada debería comprometerse incondicionalmente con la democratización y actuar en consecuencia. La falta de liderazgo en el gobierno, la debilidad de las instituciones estatales y no estatales y el descontento generalizado son condiciones propicias para impulsar este proyecto.

El otro proyecto busca favorecer todavía más al sector económicamente más poderoso del país, sin preocuparse del impacto devastador que esta política tendrá en los otros sectores productivos y sociales. Este proyecto también encuentra respaldo en las teorías neoliberales predominantes en el ámbito internacional que favorecen la vinculación a las cadenas mundiales de producción y monetarización. Este grupo privilegiado ha adquirido el poder necesario para poner al servicio exclusivo

de sus intereses a un sector importante del gobierno actual, el cual no ha dudado en asumir dichos intereses como propios, pese a existir diferencias políticas aparentemente insalvables con aquél.

Estos proyectos son incompatibles económica, política y socialmente. En el fondo, se trata de una lucha por el poder del país. Por eso, la postura de la Fuerza Armada, mal que bien, sigue siendo determinante en esta coyuntura. Dada la debilidad de la sociedad civil, el predominio de uno u otro proyecto depende, por ahora, del lado al cual se incline la Fuerza Armada. Aunque el proyecto de los más ricos de los ricos podría permitir —al cerrar los espacios económico, social y político— la derrota definitiva de quienes se oponen a la democratización, éste, en sí mismo, no es una buena solución para el país. Y no lo es porque al favorecer la acumulación y concentración de más riqueza en un grupo muy reducido genera más descontento social y hace imposible la democratización política real.

Es claro, pues, que El Salvador no camina hacia la democratización. En el mejor de los casos, lo quieren conducir hacia una democracia muy restringida y tutelada por el gran poder financiero. Ante ello, no debemos dejar que nos lleven, sino que debiéramos defender nuestro derecho ciudadano para ir sólo a donde queremos ir. El desencanto y el descontento generalizados ante la dirección política actual debieran convertirse en un punto de partida para reconfirmar la fidelidad de la nación a los acuerdos de paz. En este sentido, todos tendríamos que hacer un renovado esfuerzo para avanzar más decididamente en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

En segundo lugar, el consenso nacional existente sobre por dónde no debe ir la economía nacional, debemos transformarlo en una propuesta alternativa, cuyo fundamento sea combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las mayorías populares. Sin un pacto entre las fuerzas democráticas para promover el bienestar social de esas mayorías, será muy difícil establecer políticas de Estado que vayan más allá de las gubernamentales que, por lo general, sólo benefician los intereses de los grupos más próximos. La formulación de la política económica no debe dejarse en manos del gobierno de turno y menos en las de los asesores. Dado que en estas políticas se arriesga la vida de las mayorías populares, todos, pero éstas en particular, debiéramos participar en su formulación y en su implementación, independientemente de quién esté en el gobierno. El gobernante debiera ser simplemente el gestor del bien común.

Es urgente encontrar un proyecto alternativo a los dos que están en pugna. Cualquiera de ellos que prospere pone en peligro grave a El Salvador. La transición no está asegurada ni mucho menos; las institu-

ciones nacionales todavía no están preparadas para conducirla ni para atajar exitosamente los peligros que la acechan; el gobierno actual es contradictorio, ineficaz y no creíble porque en su interior alberga a quienes quisieran revertir el proceso, mientras él mismo se ha comprometido oficialmente con el proyecto de los más ricos. La oposición política, en particular el FMLN, todavía no acaba de encontrar cómo articular los intereses de las mayorías populares.

Hay que recordar que, hasta ahora, ONUSAL ha tenido un papel clave al mediar para desarticular situaciones socialmente explosivas. Lamentablemente, en vísperas de su salida del país, todavía no existe ninguna institución nacional que pueda ocupar su lugar. Por lo tanto, cuando en el horizonte aparecen nuevos conflictos sociales, perdemos la instancia mediadora por excelencia y asoma la Fuerza Armada.

El Salvador se encuentra en una encrucijada en la cual se arriesga su futuro. Fuerzas irracionales, egoístas y muy poco solidarias lo han colocado en esta posición difícil. No debiéramos permitir que nos arrebaten el destino del país quienes quieren más violencia autoritaria o quienes sólo miran por sus propios intereses económicos.

Junta de Directores.

San Salvador, 15 de febrero de 1995.

